



Noticiero IMER 01 de julio de 2020

## **Urge una política de Estado en materia de prevención social de las violencias y la delincuencia**

Desde hace cerca de veinte años frente al incremento de la violencia feminicida en Ciudad Juárez varias organizaciones civiles empezamos a estudiar las posibles causas económicas, sociales y culturales de esa violencia. En 2007 publicamos un primer estudio sobre La realidad social de Ciudad Juárez a partir del cual desarrollamos investigaciones similares en otras zonas metropolitanas del país, así como la promoción de una política para la prevención social de las violencias.

Tardíamente, en el Gobierno de Felipe Calderón, se hicieron algunos intentos de aplicar una política social para prevenir la violencia, pero fue en el gobierno de Enrique Peña Nieto que se asumió el diseño de un programa para la prevención social de las violencias y la delincuencia. Se creó una subsecretaría específica en Gobernación, pero por diversas circunstancias el programa terminó con cero recursos presupuestales al finalizar ese sexenio.

Mientras tanto las bandas del crimen organizado se fueron extendiendo en el territorio, apoderándose de posiciones dentro del Estado, corrompiendo funcionarios públicos, capturando municipios, incorporando y entrenando a miles de jóvenes de manera voluntaria o forzada en campos de entrenamiento de sicarios y adquiriendo tecnología y armamento cada vez

más sofisticado. Se convirtieron en empresas transnacionales con ejércitos completos.

Como telas de araña sus redes fueron cubriendo lentamente, pero de manera persistente, todo el territorio nacional. Con profundos vínculos con políticos, empresarios, jueces y fiscales, los cárteles y sus cabecillas han ido cambiando, así como la extensión de los territorios que controlan, sus alianzas, sus confrontaciones y el tipo de negocios ilegales que llevan a cabo. Se han apoderado de los reclusorios del país y tienen sistemas de cobro de contribuciones de distinto tipo en las comunidades donde gobiernan. En muchas de ellas son los que ejercen el poder, distribuyen bienes y servicios públicos y dirimen conflictos.

En cambio, la sostenida lucha por el poder político de las personas que se dedican a la política en nuestro país, que no tienen el menor empacho de pasar de un partido político a otro con tal de alcanzar posiciones de poder en las que tienen acceso a plazas y a recursos financieros y físicos, ha impedido el desarrollo de una política de Estado que confronte de manera sistemática y organizada esa expansión del crimen organizado.

También ha impedido el desarrollo y sostenimiento de una política de prevención social de las violencias y la delincuencia con la calidad, los recursos y el tiempo suficiente para revertir el deterioro y transformación de los agentes que construyen seres humanos: las familias, las escuelas, la comunidad y los servicios sociales del Estado.

Frente a esta realidad el presidente López Obrador optó por seleccionar varios programas sociales que pensó contribuirían a impedir que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes cayeran en las manos de los grupos del crimen organizado y ejercieran violencia. La herramienta central de sus programas son transferencias monetarias para que los jóvenes se capaciten en el trabajo, los niños, niñas y adolescentes se mantengan en las escuelas o los hijos de madres trabajadoras puedan comprar servicios de cuidado en el mercado privado.

Es decir, decidió desarrollar acciones de prevención de carácter general en todo el territorio nacional, para abatir la pobreza, cuando la experiencia muestra que la prevención social de las violencias es una tarea muy compleja que requiere de acciones específicas y diferentes en las comunidades afectadas, así como de la construcción de capacidades estatales que garanticen el acceso a la justicia y la vigencia del estado social de derecho.

La cohesión social está rota y su restitución requiere de actividades de acupuntura social, de diálogo, de promoción de la paz y de acceso a la justicia y a la verdad.

El violento ataque del crimen organizado a un destacado y eficiente jefe de la policía de la CDMX, en una zona de altos ingresos de la Ciudad, donde dos de sus escoltas y amigos y una víctima civil perdieron la vida, obliga al Presidente a revisar su estrategia tanto en materia de prevención social de las violencias como de seguridad pública, en general.

Tantos años de vivir bajo el acoso de las bandas criminales y de sus alianzas con los poderes económicos y políticos, determinan que en el país exista una comunidad de personas estudiosas, informadas y con experiencia en la materia. Nos urge una política de Estado en materia de seguridad pública que surja de una construcción consensuada, con amplia participación y que pueda sostenerse en el tiempo.

No es justo que buenos funcionarios públicos estén exponiendo sus vidas en un país que no cuenta con una estrategia integral y sostenida en el tiempo para acabar con tantas violencias que nos agobian.